



Portada: Jaime Landívar

# ÍCONOS

## REVISTA DE FLACSO - ECUADOR

Nº 4. - Diciembre - Marzo, 1998

Los artículos que se publican en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores, no reflejan necesariamente el pensamiento de ICONOS

### DIRECTOR FLACSO-ECUADOR

ARQ. FERNANDO CARRION

### EDITOR ICONOS

FELIPE BURBANO DE LARA

### CO-EDITOR ICONOS

SEBASTIAN MANTILLA BACA

### COLABORADORES EN ESTE NUMERO

MICHEL RAWLAND  
ADRIAN BONILLA  
GERMANICO SALGADO  
JULIO ECHEVERRIA  
ALEX PIENKNAGURA  
ABDON UBIDIA  
QUINCHE ORTIZ  
EDUARDO KINGMAN  
JAIME LANDIVAR  
SILVIA MEJIA  
CARMEN MARTINEZ  
ANDRES GUERRERO  
JAVIER BONILLA

PRODUCCION: FLACSO- ECUADOR

DISEÑO: Luis Ochoa LL.

IMPRESION: Eclimpres S.A.

### FLACSO ECUADOR

Dirección: Av. Ulpiano Páez  
118 y Patria

Teléfonos: 232-029  
232-030 232-031 232-032

Fax: 566-139

E-Mail: coords2@hoy.net

ICONOS agradece el auspicio de ILDIS y Fundación ESQUEL

# INDICE

## COYUNTURA

Perspectivas del sistema electoral ecuatoriano **4**  
MICHEL ROWLAND

Heterogeneidad, legitimidad e incertidumbre **9**  
ADRIAN BONILLA

## ACTUALIDAD

Globalización e integración en América Latina **18**  
GERMANICO SALGADO

## POSMODERNIDAD

La 'irrepresentabilidad' de la política **32**  
JULIO ECHEVERRIA

El nebuloso sistema posmodernista **44**  
ALEX PIENKNAGURA



Modernidad y posmodernidad **54**  
ABDON UBIDIA

## CULTURA Y GLOBALIZACION

De los medios a las mediaciones o las preguntas por el sentido **62**  
QUINCHE ORTIZ

¿Qué es lo que hace pequeñas a nuestras ciudades? **68**  
EDUARDO KINGMAN

## DIALOGOS



Los círculos viciosos del presidencialismo **81**  
ARTURO VALENZUELA

## FRONTERAS

Cuba: ¿No más cambios por ahora? **89**  
SILVIA MEJIA

Racismo, amor y desarrollo comunitario **98**  
CARMEN MARTINEZ

## ENSAYO

Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria **112**  
ANDRES GUERRERO

## RESENAS

Reseñas bibliográficas: **124**  
- El Estado como solución  
- Frágil felicidad. Un ensayo sobre Rousseau  
- Los espectros de Marx  
- Ecuador: Señas particulares

# HETEROGENEIDAD, LEGITIMIDAD E INCERTIDUMBRE

Las fuerzas políticas que tradicionalmente representaban los intereses de la Costa, viven momentos de insólita debilidad

Por Adrián Bonilla  
Subdirector de FLACSO-Ecuador

## INTRODUCCION

Estas notas intentan ordenar algunas imágenes sugeridas por los acontecimientos políticos ecuatorianos de 1997 y los primeros meses de 1998. Todas las funciones del Estado han sido tensionadas en su legitimidad y en su eficacia. La presidencia de la República, acosada no sólo por las múltiples fracturas de la coalición que posibilitó la caída de Bucaram y la ascensión del gobierno interino, sino también por serios problemas legales de sus más importantes personajes, por la pérdida de control del proceso político y la incapacidad de manejar las situaciones provocadas por el desastre de El Niño y la crisis económica.

La crisis política ecuatoriana, por otra parte, se desenvuelve en un contexto que puede ser especialmente conflictivo, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad movilizadora de las identidades. Siendo éste un tema importante relacionado a la fragmentación política y el telón de fondo de la crisis de hegemonía crónica que constituye la política ecuatoriana.

Con estos antecedentes, el presente ensayo se organiza en dos partes. La primera, aborda los problemas de legitimidad del orden político ecuatoriano, previos y no resueltos por la elección y posterior derroca-

miento de Bucaram, y la segunda especula acerca de las implicaciones y circunstancias que rodean a la crisis de representación de la Costa, una vez que las fuerzas políticas que tradicionalmente representaban los intereses de la región demográfica y económicamente más importante del país, atraviesan por momentos de insólita debilidad. Las conclusiones apuntan a reflexionar sobre los efectos que estos fenómenos tendrán sobre el próximo gobierno y la legitimidad de las instituciones políticas. (1)

## HETEROGENEIDAD ECUATORIANA Y PRECARIEDAD INSTITUCIONAL: DE BUCARAM A LAS ELECCIONES DE 1998

La transición hacia un nuevo gobierno ecuatoriano ha estado marcada por la incapacidad de las instituciones de la sociedad-política de procesar la enorme diversidad de intereses y demandas que los distintos actores políticos portan en un escenario



signado por la complejidad.

El Congreso, que estuvo expuesto desde el principio por su protagonismo en el reemplazo gubernamental, perdió además toda relevancia al instalarse la Asamblea Constituyente y ser reemplazado por un cuerpo colegiado cuya legitimidad electoral reciente dejó sin sustentación la representación alcanzada en 1996 por los diputados, quienes fueron cambiando sus rostros originales en aras de sucesivas y oscuras suplencias. La proximidad electoral y la propia crisis de los partidos y del gobierno, por otra parte, parece que dejaron al Parlamento sin objetivos políticos. No tuvo un papel en la modernización del Estado, para eso estuvo la propia Constituyente, sus lazos con el Ejecutivo le impidieron fiscalizar, y hasta la propia tarea de emitir leyes secundarias ha sido contingente a la incertidumbre generada por la coexistencia de la Asamblea y las siguientes elecciones.

La Corte Suprema de Justicia y los organismos de control, finalmente, fueron golpeados por múltiples escándalos y denuncias de corrupción en donde el caso de los gastos reservados, la salida del País del segundo personaje más conspicuo del régimen, luego del mismo presidente de la República, concentró alrededor de sus significados la imagen de la crisis y el tortuoso camino de la transición. Las expectativas de los actores sociales y políticos que expulsaron al gobierno roldosista no pudieron prever los enormes costos de la ruptura institucional y probablemente sobreestimaron la capacidad de la sociedad de reconstruir su aparato legal y la legitimidad gubernamental.

El caso ecuatoriano es *sui generis* en la historia reciente de América Latina. El auge y caída de Bucaram, así como la salida posterior a su derrocamiento, es difícilmente comparable con experiencias de sustitución gubernamental o de adaptación constitucional a nuevos gobiernos. Ni la

crisis paraguaya ni la guatemalteca se parecen a lo ocurrido en el Ecuador, porque mientras en esos países las presiones contra el gobierno provinieron de sectores de las fuerzas armadas, que fueron reducidos en su momento por la presión de la sociedad doméstica y de la comunidad internacional, en donde fue protagónico el papel de los Estados Unidos, en el Ecuador, fue una amplia coalición de prácticamente todos los actores políticos relevantes, acompañados por nuevos y tradicionales movimientos sociales, la que posibilitó la caída de un gobierno que había abierto fuegos, en apenas seis meses, contra los empresarios, los sindicatos, la iglesia, los partidos políticos, el parlamento, los gobiernos seccionales

los más poderosos del país, las fuerzas armadas, y como si esto hubiese sido poco, la embajada estadounidense.

En su momento, hiperinflación y caos económico ilegitaron al gobierno de Alfonsín en Argentina y al de Siles Suazo en Bolivia, abriendo el paso para una sucesión más temprana de aquella que preveía la Constitución pero que se sustentaba en una nueva legitimidad electoral. En 1992 Alberto Fujimori disuelve el Congreso peruano

y logra reconstituir a su favor la institucionalidad peruana mediante un acuerdo gubernativo en el que las Fuerzas Armadas cumplen un rol central y en donde es también fundamental el triunfo electoral de los agentes del régimen. El contexto peruano fue también de crisis económica y de inestabilidad social provocada por la violencia guerrillera.

A pesar de las enormes diferencias entre los tres casos hay varios factores comunes: un proceso de reconcentración del poder gubernamental, nuevas legitimidades electorales y resultados relativamente inmediatos en cuanto al manejo de la crisis social y de la economía. Nada de esto se produjo en el Ecuador.

La crisis política que termina con la pre-

**El caso ecuatoriano es *sui generis* en la historia reciente de América Latina. El auge y la caída de Bucaram son difícilmente comparables con otras experiencias de sustitución gubernamental**

sidencia de Bucaram expresa sobre todo la incapacidad de ese gobierno de incluir en el bloque en el poder a un conjunto de actores e intereses, sin los cuales la gobernabilidad es sumamente débil. El gobierno roldosista no sólo que no logró la confianza de nadie que no sea de su propio círculo sino que lesionó en muy poco tiempo la poca credibilidad que tenía. Cuando se produjeron las movilizaciones masivas en febrero de 1996, no tuvo un sólo defensor. En una sociedad fracturada regionalmente, atravesada por gigantescas diferencias culturales, étnicas y sociales, construida sobre una complejísima red de relaciones políticas tradicio-

nales y no modernas, la legitimidad electoral no es suficiente para gobernar, menos aún cuando las decisiones apuntan a la exclusión, la conducta de los gobernantes violenta el imaginario socialmente aceptado para ese papel, los propósitos de la gestión evidencian el afán

de lucro y las prácticas traslucen corrupción. No es que el régimen de Bucaram fue el único que navegó en esas aguas, pero sí fue excepcional en la violencia de la imagen del patrimonialismo y en el patético aislamiento que lo consumió.

La sustitución del gobierno bucaramista originalmente reunió en forma efímera a muchos de los heterogéneos intereses que se coaligaron en contra del roldosismo, pero en poco tiempo las prácticas usuales de la política ecuatoriana redujeron la coalición gobernante a una alianza entre el ejecutivo y el Parlamento mediada por la que en ese entonces era la fuerza política más poderosa del País: el Partido Socialcristiano, liderado por el Alcalde de Guayaquil. La depuración parlamentaria que implicó la expul-

sión de un significativo número de diputados aliados del antiguo gobierno, dio paso a un igualmente numeroso grupo de parlamentarios independientes que rápidamente se socializaron en las más puras prácticas clientelares. El gobierno obtuvo una fácil mayoría fundamentada en diputados provinciales desarraigados de los partidos, en los socialcristianos y en fuerzas, como la Democracia Popular, muy poderosa en la Capital de la República, que quisieron ver la oportunidad de una reforma política.

La heterogeneidad de la sociedad ecuatoriana vuelve difícil la permanencia de los acuerdos políticos y esto es especialmente evidente cuando los procesos electorales

abren espacios de participación al conjunto de la sociedad.

Las elecciones, sin embargo, eran inevitables dada la dudosa pureza del proceso que entronizó al gobierno interino.

La convocatoria a una consulta popular que legitime lo actuado por el Congreso

no pudo elu-

dir, a pesar de los intentos del Ejecutivo, el llamamiento a una Asamblea Constituyente como la instancia suprema encargada de llevar a cabo el propósito central de la coalición gobernante: la reforma política del Estado y las bases institucionales para la liberalización de la economía.

Los resultados electorales del proceso que rodeó a la Asamblea, a pesar de una reforma electoral que sin duda benefició a las mayorías (2), volvieron a expresar una multiplicidad de fuerzas e intereses. Se confirmó la presencia de los socialcristianos como la mayor fuerza política, que hacía un ejercicio de preparación para las próximas elecciones presidenciales, pero que en



términos reales no creció nada respecto de los últimos resultados de elecciones pluripersonales. El Partido Roldosista, sin embargo de que obtuvo una muy pobre representación, continuó siendo la segunda fuerza más votada del país, mientras que expresiones políticas de la Sierra: Democracia Popular, Pachakutik e Izquierda Democrática elevaron la adhesión electoral respecto de su desempeño en 1996. La Asamblea replicó, de este modo, en un inicio la misma alianza mayoritaria que regía el Congreso, lo cual no evitó la manifestación de serias contradicciones con el Parlamento.

La Asamblea, de todas formas, tenía como telón de fondo la proximidad de las elecciones presidenciales. Independientemente de la voluntad de algunos de sus protagonistas, el hecho cierto fue que las expectativas de reforma no pudieron eludir el evento más importante de la vida política de cualquier república, menos aún en el Ecuador, en donde la capacidad de gestión política de las instituciones gubernamentales está supeditada a prácticas clientelares y patrimoniales, así como a la presencia de caudillos y caciques, cuya conducta puede llegar a normar la acción de los partidos y otros mecanismos de intermediación de la sociedad política. Básicamente la Asamblea sentó a duras penas las reglas que regularían las próximas elecciones presidenciales y en este papel no hizo nada más (ni menos) que los dieciocho intentos constitucionales previos en la historia política ecuatoriana: servir de espacio de transición gubernamental civil entre una crisis política que dio como resultado el derrocamiento de un gobierno ilegítimo, hacia uno nuevo.

Las agendas regionales se representan cada vez con más fuerza, sin que el sistema institucional sea capaz de procesarlas. La Asamblea, al dejar de ser el espacio natural para la resolución procedimental de estos conflictos, deja abierta una brecha que tiene la tendencia de radicalizarse. En 1995 varias provincias se declararon unilateralmente estados federales, a lo largo de los dos años posteriores movimientos regionales se han enfrentado abiertamente con el gobierno central alrededor de demandas de obra pública. Ni los gobiernos seccionales, ni los cuerpos colegiados de representación como el Congreso han tenido la capacidad de



pro-  
cesar intereses  
de diferenciación, a pe-  
sar de que el tópico de la descen-  
tralización y la desconcentración ha estado  
presente per

mamente en los debates.

La identidad nacional ecuatoriana ha tenido probablemente como el símbolo unificador más poderoso a la frontera. En un país marcado por las diferencias regionales, el espacio nacional es el signo compartido por todos los ecuatorianos. En los últimos años, se desarrolla un proceso de negociaciones con el Perú, que por exclusión es otro signo cohesionador de la nacionalidad ecuatoriana, que eventualmente solucionaría el problema fronterizo y dejaría vacío el poder concentrador de la frontera como signo nacional. La posibilidad de la emergencia aún mayor del conflicto regional es previsible y por ello, hace falta en este punto estudiar la debilidad política de las instituciones partidarias de la Costa y la posibilidad de que esta región, que es demográficamente mayoritaria esté subrepresentada y genere por lo tanto una nueva crisis de legitimidad en el orden político ecuatoriano.

### **CRISIS DE REPRESENTACION DE LA COSTA: RETOS PENDIENTES A LA LEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL**

La fragilidad de las instituciones de la sociedad política ecuatoriana quedó en evi-

dencia cuando el partido político más importante del País se abstuvo de presentar candidaturas presidenciales. El Partido socialcristiano, cuya presencia en el Ecuador contemporáneo se articuló alrededor de la figura del ex-presidente León Febres Cordero y de una adhesión electoral abrumadora en la ciudad de Guayaquil, ganó todas las elecciones pluripersonales desde el año de 1990, sin importar que ellas se hubieran realizado al mismo tiempo que las de presidente o en el medio término. La decisión del segundo líder más visible, Jaime Nebot, de no presentarse como candidato precipita una crisis interna que reta no sólo al propio partido sino al conjunto de la institucionalidad política ecuatoriana porque crea un vacío de poder regional, muy difícil de reemplazar, en una sociedad en donde la principal diferencia en las percepciones de la política es la que existe entre Sierra y Costa.

El cincuenta y dos por ciento de la población electoral ecuatoriana se encuentra en la Costa frente a un tres por ciento de la Amazonía y un cuarenta y cinco por ciento de la Sierra. Con la excepción de la Jaime Roldós, quien gana las elecciones en un momento en que el electorado busca una ruptura de identidad tanto con el gobierno militar como con el antiguo régimen, previo a las dictaduras de los años setenta, el voto en primera vuelta tanto en la Sierra como en la Costa por un candidato perteneciente a la otra región, ha sido absolutamente minoritario. Solamente en 1996 se ha dado el caso de que dos candidatos de una misma región, en este caso la Costa, queden en primero y en segundo lugar.

A diferencia de la Sierra, en donde varias fuerzas políticas han aparecido con vigor y se han desvanecido luego de algunos años de presencia (3), la Costa se ha caracterizado por lo menos desde 1988 por tener una representación concentrada básicamente alrededor de dos organizaciones: los socialcristianos y el Partido Roldosista. Los partidos de raigambre serrana nunca lograron inser-

tarse en la cultura política costeña, mientras que más bien aquellas entidades cuya dirigencia opera en Guayaquil, sobre todo en los años noventa pudieron proyectarse con relativo éxito a varias provincias serranas.

Las elecciones presidenciales de 1998 se realizan sin la presencia socialcristiana, que ha sido de lejos la mayoría electoral más importante del Litoral, y con un Partido Roldosista disminuido y devaluado por su expulsión del gobierno, la ausencia de su máximo cacique y la caída en las preferencias electorales. Aún a pesar de que la ausencia de los socialcristianos produjera una elevación del caudal de votos del PRE, es probable

que la calidad de la representación política no tenga la representatividad necesaria para portar los intereses de los actores sociales más importantes de la región. El problema en este punto supera las posibilidades de mediación que la mera institucionalidad gubernamental y electoral ofrecen, se trata de un dilema de legitimidad.

Ambos partidos pueden pensarse alrededor de varios puntos en común: Los dos se organizan alrededor de la figura de caudillos: Febres Cordero, quien se inicia políticamente en la década de los años sesenta como dirigente empresarial y que ha sido identificado como uno de los más

conspicuos representantes de la elite guayaquileña no sólo por fortuna, sino sta-

### El problema político supera las posibilidades de mediación que la mera institucionalidad gubernamental y electoral ofrecen, se trata de un dilema de legitimidad





tus familiar, pertenencia a clubes exclusivos y círculos financieros, por una parte ; y por otra, Abdala Bucaram, proveniente de una familia de migrantes libaneses vinculada con la dirigencia deportiva y la actividad política a través de mediaciones electorales. Los dos jefes políticos tienen como clientela electoral inmediata a la ciudad de Guayaquil.

Ambos partidos han jugado con un lenguaje vago en términos ideológicos, pero han sido exitosos en el manejo de imágenes populistas, si bien el Partido Socialcristiano ha sido identificado, generalmente desde la oposición, como una organización de derecha sobre todo por la pertenencia a círculos empresariales de la mayoría de sus candidatos.

La presencia nacional de las dos organizaciones ha sido posible gracias a alianzas con caudillos locales, más que al tejido de redes orgánicas de carácter partidario.

Las diferencias principales pueden encontrarse en los intereses estructurales que contienen ambas organizaciones. Guayaquil, como algunas otras ciudades de la Costa, es un espacio en el cual la cultura política socializa valores a través de una ética de autopromoción utilitaria. Por el hecho de haber estado alejada del centro de decisiones políticas y administrativas, por razones atinentes a la constitución del espacio productivo, por su vinculación al comercio exterior, las elites guayaquileñas son naturalmente em-

presariales. Los valores empresariales permean el conjunto de actitudes del electorado guayaquileño y vuelven posible que los partidos políticos puedan representarlos, sin que esta conducta sea leída desde los sectores subordinados como contradictoria con sus propios intereses. De este modo es posible entender que una diferencia básica entre roldosistas y socialcristianos se establezca alrededor de los grupos económicos que representan.

Mientras los socialcristianos han sido asimilados a los más tradicionales grupos financieros, vinculados a la agroexportación y a la banca desde hace muchos años, los roldosistas son vistos como la expresión de comerciantes y fortunas relativamente recientes. Esto no quiere decir que ambos partidos no ha-

yan compartido en ocasiones distintas los mismos auspiciantes.

La crisis política de la Costa, y particularmente de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, cuya población electoral es mayor al veinticinco por ciento del total nacional, no es reciente. La ciudad particularmente se ha caracterizado por la inestabilidad y por las disputas sin cuartel entre los dos grupos más poderosos. Solamente la presencia de Febres Cordero, quien optó por ser alcalde luego de haber sido presidente de la República sacó temporalmente del punto muerto a los gobiernos locales luego de que a lo largo de la última etapa de gobernabilidad civil, la administra-

Guayaquil es un espacio en el cual la cultura política socializa valores a través de una ética de autopromoción utilitaria

ción guayaquileña estuviera a punto de colapsar varias veces por la falta o el desperdicio de recursos económicos, una aproximación depredadora, atribuida generalmente a los roldosistas, hacia los bienes públicos y la toma de decisiones excluyente y arbitraria de quienes accedieron al poder municipal y provincial.

La figura del ex-presidente no transforma radicalmente las percepciones ni las conductas de la clase política guayaquileña pero otorga un peso simbólico inusitado al ejercicio de la autoridad. Esta circunstancia posibilita la generación de condiciones mínimas de gobernabilidad en toda la provincia sobre la base de la exclusión de los roldosistas. Las disputas políticas en el Guayas pueden interpretarse con la metáfora de los juegos de suma ce-

ro. La victoria de unos ha implicado generalmente la derrota de otros. Las confrontaciones y su misma radicalidad han impedido la formación de terceros partidos. Ninguna fuerza política alternativa, vehiculizada por partidos serranos o por otras organizaciones costeñas, ha sido relevante a las instituciones de la política guayaquileña.



BONIL

Eventualmente el empresariado formal, en ocasiones, sobre todo en aquellas que interpelan demandas de carácter regional, ha corporativizado la actividad política, pero en lo que se refiere a la representación en los gobiernos locales se ha subsumido generalmente en los canales del propio partido socialcristiano y en la figura de Febres Cordero, quien por otra

parte, es uno de sus líderes históricos como sector productivo.

La fortaleza de las figuras de Febres Cordero y Bucaram evidencian al mismo tiempo la extrema debilidad de la sociedad política costeña. Ha bastado la ausencia de esos líderes o del heredero natural del Patriarca: Jaime Nebot, para que toda la región

atraviase un período insólito de incertidumbre política cuyos antecedentes inmediatos se encuentran en la caótica administración de Bucaram, pero también en la incapacidad del Partido Socialcristiano de representar eficazmente al resto de la sociedad ecuatoriana que no sea la ciudad de Guayaquil. La abstención de la candidatura presidencial, que comienza por las sospechas de Nebot a propósito de su imposibilidad

de ganar en 1998 y acabar con su vida política, que sigue con su tenaz control del partido que impide la emergencia de otras figuras que puedan reemplazarlo, y que culmina con la publicación de la condición de salud del máximo líder, revelan que nexos institucionales entre la población y el liderazgo son tenues, personales y precarios, tanto como el temor a la derrota o la certeza irrefutable que ofrece la muerte.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias, como en otras ocasiones, probablemente sirvan como agentes catalizadores de las contradicciones y fisuras del orden político ecuatoriano. En 1998 la Costa va a estar obligada a usar canales de representación inusuales, además de aquellos tradicionales: candidaturas y partidos serranos, por una parte, y los devaluados partidos políticos guayaquileños. Nuevanete, la calidad de la representación, independientemente de que esas organizaciones tengan la oportunidad de lograr votaciones caudalosas, establece un reto a la legitimidad de cualquier gobierno, sobre todo en el Ecuador en donde nunca ha bastado el solo acto electoral para investir de autoridad a los gobernantes.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias probablemente servirán como agentes catalizadores de las contradicciones y fisuras del orden político ecuatoriano





## REFLEXION FINAL

Las elecciones de 1998 muestran, antes de su realización, un vuelco de las preferencias electorales a nivel nacional, nuevamente hacia fuerzas políticas serranas. Como nunca antes en la etapa que se inicia en 1978 en el Ecuador al comienzo de la campaña la ausencia de candidaturas oficiales caracterizó un primer momento. El panorama se transforma cuando Nebot anuncia su ausencia y el PSC decide no participar, básicamente por la falta de voluntad o de posibilidades de sus figuras relevantes de participar en la campaña. En principio, los beneficiarios de la ausencia resultan las fuerzas políticas serranas, por una parte, y por otra (by default) el partido roldosista que es la Némesis natural del partido de Febrés Cordero. Cualquiera que sea el resultado electoral la tendencia posiblemente marque un momento de ocaso para la que fuera la organización más poderosa del país, caracterizado por el vacío que deja en la Costa, sin que haya nada concreto que pueda sustituirla a largo plazo las expectativas de nueva incertidumbre para la región y específicamente para Guayaquil podrían implicar un escenario de difícil gobernabilidad a mediano plazo.

Este escenario, por otra parte, podría suponer retos importantes a la legitimidad del próximo gobierno, cualquiera que este fuere, sobre todo porque las agendas regionales se manifiestan cada vez con mayor fuerza frente a un sistema político con pocas

capacidades de procesamiento de ese tipo de demandas. A esto debe sumarse inevitablemente una nueva política de ajuste y probablemente la ratificación de las negociaciones con el Perú, temas ambos que suponen escollos desde el principio a la nueva administración.

La turbulencia de la transición y los costos políticos de la elección y posterior derrocamiento de Bucaram han mostrado la precariedad de las instituciones políticas ecuatorianas, y la persistencia de un sistema de percepciones, valores y creencias en donde la imagen de lo público como bien colectivo - probablemente por las condiciones estructurales ancestrales que posibilitaron intensos mecanismos de exclusión o dominación de buena parte de la población, está enajenada de la decisión política inmediata. La heterogeneidad regional, productiva y cultural de la sociedad ecuatoriana parece ser el cimiento de una crisis continua de hegemonía que lesiona la legitimidad de las instituciones y la gobernabilidad civil de origen electoral. La compulsión unitaria del Estado ecuatoriano no parece ser el marco adecuado para procesar las diferencias y en este contexto, incluso las elecciones de 1998 corren el riesgo de ser simplemente... otras elecciones.

## NOTAS

1.- Este trabajo no es, en rigor, un ejercicio académico. Está constituido por notas que permiten especulaciones sobre acontecimientos efímeros.

2.- En la provincia del Guayas, por ejemplo, el Partido Socialcristiano obtiene el noventa por ciento de la representación con algo más del treinta y cinco por ciento de los votos válidos.

3.- El caso del Partido Socialista, que tuvo éxito en provincias durante toda la década de los ochenta puede ser un ejemplo de esta afirmación. Lo mismo la Izquierda Democrática, muy reducida en los noventa luego de haber sido el primer partido político ecuatoriano.